

Persevera

AL ALCANCE DE QUIEN ESTUDIA

BLOQUE IV · DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO ESPAÑOL · PARTE
GENERAL Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

Tema 8

La aplicación de los tributos. Normas comunes de los procedimientos

Cuerpo Técnico de Hacienda

INGRESO LIBRE · EDICIÓN 2026

perseveraoposiciones.com

AL ALCANCE DE QUIEN ESTUDIA

Cada año, mucha gente perfectamente capaz de aprobar una oposición no llega a intentarlo en serio. Y casi nunca es por falta de cabeza: es por la vida. El trabajo que te deja sin fuerzas justo cuando ibas a ponerte, las cargas familiares, no saber bien por dónde empezar o, simplemente, no poder dedicarle el día entero ni pagar una buena academia. Cosas que poco tienen que ver con lo que uno valdría sentado delante del examen.

Persevera nace de ahí: de la idea de que opositar debería depender de que estudies, y de nada más.

Prepararse bien no debería depender de cosas ajenas a tu esfuerzo. Hay muchísima gente que sacaría la plaza por su cuenta si tuviera las herramientas adecuadas a mano. El problema es que casi siempre se ven solo dos caminos: una academia, con sus horarios y su ritmo, o hacerlo del todo en solitario, sin nada ni nadie que te guíe. Persevera quiere ser un tercer camino: la libertad de ir por tu cuenta, pero con herramientas de verdad para hacerlo en serio.

Ese tercer camino empieza por lo esencial: el temario, completo y gratuito, sin registrarte. Descárgalo, guárdalo, imprímelo, compártelo con quien quieras: es tuyo, sin compromisos y para siempre.

Y las herramientas de verdad están en nuestra app. Porque, como quienes hemos pasado por ahí, sabemos que tener el temario es solo el principio: en la app el temario cobra vida, con tests para ponerte a prueba, fichas de repaso, esquemas y un seguimiento que te muestra por dónde vas y dónde flojeas. Todo pensado para exprimir cada hora de estudio. Y da lo mismo cómo te prepares: por tu cuenta o como refuerzo de una academia, aquí siempre tienes con qué practicar más.

Opositar es, sobre todo, perseverar: madrugones, días en que no entra nada, semanas en que dudas de si merece la pena. Y es en esa parte —la de aguantar— donde queremos estar a tu lado, dándote las herramientas que a nosotros nos habrían hecho el camino más fácil.

— *El equipo de Persevera*

ÍNDICE

Epígrafe 1 — La aplicación de los tributos: concepto y órganos competentes	5
1. Dónde encaja la materia: el Título III de la LGT	5
2. El concepto legal: qué comprende la aplicación de los tributos	5
3. La separación de funciones y el desarrollo por procedimientos	7
4. Los órganos competentes: la Administración tributaria	8
5. La competencia territorial (art. 84)	10
Epígrafe 2 — Información y asistencia. La consulta tributaria. El NIF y la asistencia mutua	12
1. El deber de información y asistencia (art. 85)	12
2. Publicaciones (art. 86) y actuaciones de información (art. 87)	14
3. Las consultas tributarias escritas (art. 88)	15
4. Los efectos de las contestaciones (art. 89)	19
5. Información con carácter previo a la adquisición o transmisión de inmuebles (art. 90)	22
6. Los acuerdos previos de valoración (art. 91)	24
7. El número de identificación fiscal	26
8. La asistencia mutua	31
Epígrafe 3 — Normas comunes: prueba, notificaciones, obligación y plazo de resolución	35
1. El sistema de fuentes de los procedimientos tributarios (art. 97)	35
2. Las fases del procedimiento: iniciación (art. 98)	36
3. Desarrollo de las actuaciones (art. 99)	37

4. Terminación (art. 100)	39
5. La obligación de resolver (art. 103)	40
6. Los plazos de resolución y los efectos de la falta de resolución (art. 104)	41
7. La prueba (arts. 105 a 108)	48
8. Las notificaciones (arts. 109 a 112)	50
9. Otras normas comunes: domicilio, denuncia, comprobación y plan de control	55
Epígrafe 4 — Las liquidaciones tributarias	57
1. Concepto: el acto que cuantifica la deuda	57
2. Clases: provisionales y definitivas	58
3. Por qué importa la distinción: el efecto preclusivo	59
4. La notificación de las liquidaciones (art. 102)	61
5. Notificación colectiva y notificación tácita	62

TEMA 8

Epígrafe 1 — La aplicación de los tributos: concepto y órganos competentes

1. Dónde encaja la materia: el Título III de la LGT

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, **LGT**) organiza la actividad de la Hacienda pública en tres grandes bloques, y cada uno ocupa un título propio. El **Título III** (arts. 83 a 177 *quaterdecies*) regula la **aplicación de los tributos**. El **Título IV** (arts. 178 a 212) regula la **potestad sancionadora**. El **Título V** (arts. 213 a 249) regula la **revisión en vía administrativa**.

Dentro del Título III, el **Capítulo I** (arts. 83 a 96) contiene los **principios generales** de la aplicación de los tributos —incluida la información y asistencia—, y el **Capítulo II** (arts. 97 a 116) las **normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios**. Los capítulos siguientes desarrollan ya cada función: gestión (III), inspección (IV), recaudación (V) y asistencia mutua (VI).

El desarrollo reglamentario está repartido en dos normas que no deben confundirse. El **Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio**, aprueba el **Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos** (en adelante, **RGGI**). El **Real Decreto 939/2005, de 29 de julio**, aprueba el **Reglamento General de Recaudación (RGR)**. Todo lo que en este tema sea plazo de detalle —los días de subsanación, la asignación del NIF, el cómputo de dilaciones— procede casi siempre del **reglamento**, no de la ley.

2. El concepto legal: qué comprende la aplicación de los tributos

El art. 83 abre el Título III con una definición que es, a la vez, una delimitación negativa.

Artículo 83 de la Ley 58/2003 (LGT) · Ámbito de la aplicación de los tributos

1. La aplicación de los tributos comprende **todas las actividades administrativas** dirigidas a la **información y asistencia** a los obligados tributarios y a la **gestión, inspección y recaudación**, así como las **actuaciones de los obligados** en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

También se considera aplicación de los tributos el ejercicio de las actividades administrativas y de las actuaciones de los obligados a las que se refiere el párrafo anterior, que se realicen en el marco de la **asistencia mutua**.

2. Las funciones de aplicación de los tributos se ejercerán de **forma separada** a la de resolución de las **reclamaciones económico-administrativas** que se interpongan contra los actos dictados por la Administración tributaria.
3. La aplicación de los tributos se desarrollará a través de los **procedimientos administrativos** de gestión, inspección, recaudación y los demás previstos en este título.
4. Corresponde a **cada Administración tributaria** determinar su **estructura administrativa** para el ejercicio de la aplicación de los tributos.

Del art. 83 se extraen cinco consecuencias.

Primera: el contenido es cuádruple. La aplicación de los tributos comprende la **información y asistencia**, la **gestión**, la **inspección** y la **recaudación**.

Segunda: no es solo actividad administrativa. El art. 83.1 incluye expresamente «las **actuaciones de los obligados** en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias». Presentar una autoliquidación, atender un requerimiento, aportar una prueba o solicitar un aplazamiento son, técnicamente, aplicación de los tributos. El concepto es **bilateral**.

Tercera: la asistencia mutua entra en el concepto. El párrafo segundo del art. 83.1 —añadido con efectos desde el 1 de enero de 2012— arrastra al ámbito de la aplicación de los tributos las actividades desarrolladas «en el marco de la asistencia mutua», es decir, en cooperación con la Unión Europea, con otras entidades internacionales o supranacionales y con otros Estados. El art. 177 bis.2 lo confirma por remisión expresa al art. 83.1, segundo párrafo.

Cuarta: quedan fuera dos funciones capitales. El art. 83 **no** menciona ni la **potestad sancionadora** ni la **revisión**. La consecuencia es que ni imponer sanciones ni resolver recursos de reposición o reclamaciones económico-administrativas son «aplicación de los tributos». Es la delimitación negativa que el art. 83 establece de forma expresa.

Quinta: cada Administración se organiza como quiera. El art. 83.4 remite la estructura administrativa a cada Administración tributaria, y el art. 84 hará lo propio con la competencia territorial. La LGT fija el «qué», no el «quién concreto».

MATIZ

Que la **potestad sancionadora** quede fuera de la aplicación de los tributos tiene un reflejo procedimental muy concreto: el **procedimiento sancionador se tramita de forma separada** del de aplicación de los tributos (art. 208.1 LGT), *salvo* renuncia del obligado o actas con acuerdo. Y que quede fuera la **revisión** se traduce en la regla del art. 83.2: quien aplica los tributos no resuelve las **reclamaciones económico-administrativas** contra sus propios actos, que corresponden a los **Tribunales Económico-Administrativos**. En cambio, el **recurso de reposición** —potestativo y previo— sí lo resuelve el propio órgano que dictó el acto, pero sigue siendo *revisión* (Título V), no aplicación de los tributos.

3. La separación de funciones y el desarrollo por procedimientos

El art. 83.2 consagra la llamada **separación entre gestión y resolución de reclamaciones**. En el ámbito estatal esa separación es orgánica y se refleja en el art. 5.2 LGT, que excluye de las competencias de la **Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)**

tanto las reclamaciones económico-administrativas como la declaración de nulidad de pleno derecho del art. 217.

El art. 83.3, por su parte, impone que la aplicación de los tributos se desarrolle **a través de procedimientos administrativos**: los de gestión (arts. 123 y ss.), inspección (arts. 141 y ss.), recaudación (arts. 160 y ss.) y «los demás previstos en este título».

4. Los órganos competentes: la Administración tributaria

¿Quién aplica los tributos? La respuesta general la da el art. 5, situado en el Título I de la ley.

Artículo 5 de la Ley 58/2003 (LGT) · La Administración tributaria (aps. 1 a 3)

1. A los efectos de esta Ley, la **Administración Tributaria** estará integrada por los **órganos y entidades de derecho público** que desarrollen las funciones reguladas en sus **títulos III, IV, V, VI y VII**.
2. En el ámbito de competencias del Estado, la aplicación de los tributos, el ejercicio de la potestad sancionadora y la función revisora en vía administrativa corresponde al **Ministerio de Economía y Hacienda**, *en tanto no haya sido expresamente encomendada por Ley a otro órgano o entidad de derecho público*.

En los términos previstos en su Ley de creación, dichas competencias corresponden a la **Agencia Estatal de Administración Tributaria**, *salvo* la declaración de **nulidad de pleno derecho** regulada en el artículo 217 y las **reclamaciones económico-administrativas** reguladas en el capítulo IV del título V de la presente Ley.

3. Las **Comunidades Autónomas** y las **entidades locales** ejercerán las competencias relativas a la aplicación de los tributos y el ejercicio de la potestad sancionadora derivada de dicha aplicación, así como la función revisora en vía administrativa de los actos dictados en el ejercicio de

aquellas, con el alcance y en los términos previstos en la normativa que resulte aplicable y su sistema de fuentes.

Corresponden a la Agencia Estatal de Administración Tributaria las competencias en materia de aplicación de los tributos derivadas o atribuidas por la normativa sobre **asistencia mutua**.

La competencia estatal se atribuye, como regla, al **Ministerio**, pero está *encomendada por ley* a la **AEAT**, entidad de derecho público creada por el **art. 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre**, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, con personalidad jurídica propia y régimen de funcionamiento singular. De esa encomienda se sustraen dos piezas que se quedan fuera de la Agencia: la **nulidad de pleno derecho** (art. 217, competencia del Ministro) y las **reclamaciones económico-administrativas** (Tribunales Económico-Administrativos, adscritos al Ministerio pero funcionalmente independientes).

Dentro de la AEAT, la aplicación de los tributos se reparte entre **servicios centrales** y **servicios territoriales**. En los centrales, los **Departamentos** funcionales —de **Gestión Tributaria**, de **Inspección Financiera y Tributaria**, de **Recaudación**, de **Aduanas e Impuestos Especiales** y de **Informática Tributaria**— dictan los criterios y dirigen las actuaciones. En los territoriales, la pirámide desciende de las **Delegaciones Especiales** (una por comunidad autónoma) a las **Delegaciones** y a las **Administraciones**. Junto a ellos, la **Delegación Central de Grandes Contribuyentes** concentra, con ámbito nacional, la aplicación de los tributos respecto de los obligados a ella adscritos.

Y hay un órgano decisivo que **no** pertenece a la AEAT: la **Dirección General de Tributos**, órgano del Ministerio al que corresponde, en el ámbito estatal, **contestar las consultas tributarias escritas** (art. 65 RGGI), en coherencia con el art. 88.5 LGT, que atribuye esa competencia a los órganos «que tengan atribuida la iniciativa para la elaboración de disposiciones en el orden tributario, su propuesta o interpretación». La aplicación de los tributos, por tanto, no es un monopolio de la Agencia.

Fuera del Estado, el art. 5.3 reconoce las competencias propias de **comunidades autónomas** —tributos propios, cedidos gestionados por ellas— y **entidades locales**, y los apartados 4 y 5 habilitan **acuerdos de colaboración** entre unas y otras. Adviértase el

inciso final del art. 5.3: las competencias derivadas de la normativa de **asistencia mutua** corresponden, en todo caso, a la **AEAT**.

5. La competencia territorial (art. 84)

Artículo 84 de la Ley 58/2003 (LGT) · Competencia territorial en la aplicación de los tributos

La competencia en el **orden territorial** se atribuirá al órgano que se determine por la **Administración tributaria**, en desarrollo de sus **facultades de organización**, mediante disposición que deberá ser objeto de **publicación en el boletín oficial correspondiente**.

En defecto de disposición expresa, la competencia se atribuirá al **órgano funcional inferior** en cuyo ámbito territorial radique el **domicilio fiscal del obligado tributario**.

Dos notas del precepto. La primera, que la atribución de competencia territorial exige **disposición publicada** en el boletín oficial que corresponda: no vale una instrucción interna. La segunda, que el punto de conexión sea el **domicilio fiscal** convierte a este en una pieza crítica de todo el sistema, y explica que el **art. 17 RGGI** imponga comunicar su cambio y que el art. 48 LGT lo defina con detalle.

MATIZ

La regla del domicilio fiscal es **supletoria**, y en la práctica cede con frecuencia ante disposiciones expresas de organización. El caso más visible es la **adscripción a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes**, que atrae la competencia con **ámbito nacional** con independencia de dónde tenga el obligado su domicilio. También la ceden reglas especiales por tipo de procedimiento o de tributo. Además, la **competencia territorial** (art. 84) no se confunde con la **competencia funcional u orgánica** (art. 83.4 y normas de estructura de cada Administración): la primera responde a «en qué demarcación», la segunda a «qué órgano por razón de la función».

RECUERDA

Aplicación de los tributos (art. 83): información y asistencia + **gestión, inspección y recaudación**, más las actuaciones de los obligados y lo realizado en asistencia mutua. **No** comprende la **potestad sancionadora** (Título IV) ni la **revisión** (Título V), y las funciones de aplicación se ejercen **separadas** de la resolución de las **reclamaciones económico-administrativas** (83.2). Se desarrolla **por procedimientos** (83.3) y cada Administración fija su **estructura** (83.4). **Órganos** (art. 5): en el Estado, Ministerio, con la competencia encomendada a la **AEAT** salvo **nulidad de pleno derecho** (art. 217) y **reclamaciones**. Las **consultas** las contesta la **DGT** (art. 65 RGGI). **Competencia territorial** (art. 84): la que fije una **disposición publicada** en boletín oficial y, en su defecto, el **órgano funcional inferior del domicilio fiscal**.

TEMA 8

Epígrafe 2 — Información y asistencia. La consulta tributaria. El NIF y la asistencia mutua

1. El deber de información y asistencia (art. 85)

En un sistema construido sobre la **autoliquidación**, el obligado califica, interpreta y cuantifica por su cuenta; la contrapartida de esa carga es un **deber** de la Administración de informarle y asistirle. El art. 85 lo formula y enumera sus cauces.

Artículo 85 de la Ley 58/2003 (LGT) · Deber de información y asistencia a los obligados tributarios

1. La Administración **deberá prestar** a los obligados tributarios la necesaria **información y asistencia** acerca de sus **derechos y obligaciones**.
2. La actividad a la que se refiere el apartado anterior se instrumentará, **entre otras**, a través de las siguientes actuaciones:
 - a) **Publicación de textos actualizados** de las normas tributarias, así como de la doctrina administrativa de mayor trascendencia.
 - b) **Comunicaciones y actuaciones de información** efectuadas por los servicios destinados a tal efecto en los órganos de la Administración tributaria.
 - c) **Contestaciones a consultas escritas**.
 - d) **Actuaciones previas de valoración**.
 - e) **Asistencia** a los obligados en la realización de **declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones** tributarias.

El art. 85 tiene dos rasgos. El primero, que la ley emplea el verbo «**deberá**»: no es una política de buen servicio, sino un **deber jurídico**. El segundo, que la lista es **abierta**

—«entre otras»—, de modo que la asistencia telemática, los programas de ayuda o los sistemas de datos fiscales encajan en ella sin necesidad de mención expresa.

Las cinco letras del art. 85.2 se corresponden, casi una a una, con los preceptos siguientes: la letra a) con el art. 86 (publicaciones), la b) con el art. 87 (comunicaciones y actuaciones de información), la c) con los arts. 88 y 89 (consultas), la d) con los arts. 90 y 91 (información previa sobre inmuebles y acuerdos previos de valoración) y la e) con la asistencia material que desarrolla el **art. 77 RGGI**. El RGGI añade, además, los **certificados tributarios** (arts. 70 a 75; el art. 76 quedó suprimido con efectos de 1 de enero de 2017).

Artículo 70 del RD 1065/2007 (RGGI) · Los certificados tributarios (aps. 1, 4 y 5)

1. Se entenderá por **certificado tributario** el documento expedido por la Administración tributaria que **acredite hechos relativos a la situación tributaria** de un obligado tributario.
4. **No podrán certificarse datos** referidos a obligaciones tributarias respecto de las cuales haya **prescrito** el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
5. *En tanto no haya vencido el plazo* para el cumplimiento de las obligaciones tributarias **no podrá expedirse certificado** sobre el cumplimiento de estas.

Se expiden a **instancia del obligado** al que se refieren o a **petición de un órgano administrativo o de otra persona o entidad interesada**, y en este segundo caso solo si la petición **está prevista en una ley** o cuenta con el **previo consentimiento** del obligado (art. 71.1 RGGI). El plazo de expedición es de **20 días** y, salvo que se establezca lo contrario, la **falta de emisión en plazo no determina** que el certificado se entienda emitido con carácter **positivo** (art. 73.1 RGGI). Tienen **carácter informativo** y **no son recurribles**, sin perjuicio de manifestar la disconformidad con su contenido en **10 días** (arts. 75.1 y 73.4 RGGI). Su **validez** es de **12 meses** cuando se refieren a obligaciones **periódicas** y de **tres meses** cuando se refieren a obligaciones **no periódicas** (art. 75.2 RGGI).

2. Publicaciones (art. 86) y actuaciones de información (art. 87)

Artículo 86 de la Ley 58/2003 (LGT) · Publicaciones (aps. 1, 2 y 4)

1. El **Ministerio de Hacienda** difundirá por cualquier medio, durante el **primer trimestre del año**, los **textos actualizados** de las normas estatales con **rango de ley y real decreto** en materia tributaria en los que se hayan producido variaciones respecto de los textos vigentes en el año precedente, así como una **relación de todas las disposiciones tributarias** que se hayan aprobado en dicho año.
2. El Ministerio de Hacienda difundirá periódicamente las **contestaciones a consultas** y las **resoluciones económico-administrativas** que considere de **mayor trascendencia y repercusión**.
4. El **acceso a través de internet** a las publicaciones a las que se refiere el presente artículo y, en su caso, a la información prevista en el artículo 87 de esta ley será, **en todo caso, gratuito**.

Tres datos memorizables: el sujeto obligado es el **Ministerio de Hacienda** —no la AEAT—, el plazo es el **primer trimestre del año**, y el rango alcanzado por la obligación de difundir textos actualizados es el de **ley y real decreto**. Y una regla transversal: el acceso por **internet** es **gratuito en todo caso**.

El art. 87 da un paso más: no ya publicar la norma, sino explicar **cómo la interpreta la Administración**.

Artículo 87 de la Ley 58/2003 (LGT) · Comunicaciones y actuaciones de información (aps. 1 y 2)

1. La Administración tributaria **informará a los contribuyentes de los criterios administrativos** existentes para la aplicación de la normativa tributaria, facilitará la **consulta a las bases informatizadas** donde se contienen dichos criterios y podrá remitir **comunicaciones** destinadas a

informar sobre la tributación de determinados **sectores, actividades o fuentes de renta**.

2. La Administración tributaria **deberá suministrar**, a petición de los interesados, el **texto íntegro de consultas o resoluciones concretas**, *suprimiendo* toda referencia a los datos que permitan la **identificación** de las personas a las que afecten.

El apartado 2 encierra el equilibrio característico de la materia: **transparencia del criterio y anonimización del caso**.

3. Las consultas tributarias escritas (art. 88)

La **consulta escrita** es el instrumento central del deber de información y asistencia.

Artículo 88 de la Ley 58/2003 (LGT) · Consultas tributarias escritas

1. Los obligados podrán formular a la Administración tributaria consultas respecto al **régimen, la clasificación o la calificación tributaria** que en cada caso les corresponda.
2. Las consultas tributarias escritas se formularán **antes de la finalización del plazo** establecido para el ejercicio de los derechos, la presentación de declaraciones o autoliquidaciones o el cumplimiento de otras obligaciones tributarias.

La consulta se formulará mediante **escrito dirigido al órgano competente** para su contestación, con el contenido que se establezca reglamentariamente.

3. Asimismo, podrán formular consultas tributarias los **colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales, sindicatos, asociaciones de consumidores, asociaciones o fundaciones que representen intereses de personas con discapacidad, asociaciones**

empresariales y organizaciones profesionales, así como a las **federaciones** que agrupen a los organismos o entidades antes mencionados, *cuando se refieran a cuestiones que afecten a la generalidad de sus miembros o asociados.*

4. La Administración tributaria **archivará, con notificación al interesado**, las consultas que no reúnan los requisitos establecidos en virtud del apartado 2 de este artículo y no sean **subsanadas** a requerimiento de la Administración.
5. La **competencia** para contestar las consultas corresponderá a los órganos de la Administración tributaria que tengan atribuida la **iniciativa para la elaboración de disposiciones** en el orden tributario, su **propuesta o interpretación**.
6. La Administración tributaria competente deberá **contestar por escrito** las consultas que reúnan los requisitos establecidos en virtud del apartado 2 de este artículo en el plazo de **seis meses** desde su presentación. *La falta de contestación en dicho plazo no implicará la aceptación* de los criterios expresados en el escrito de la consulta.
7. El procedimiento de tramitación y contestación de las consultas se desarrollará **reglamentariamente**.
8. La competencia, el procedimiento y los efectos de las contestaciones a las consultas relativas a la aplicación de la **normativa aduanera comunitaria** se regulará por lo dispuesto en el **Código Aduanero Comunitario**.

Quién puede consultar. El apartado 1 legitima a «los obligados», es decir, a quien tiene o va a tener una posición tributaria propia respecto de la cuestión planteada. El apartado 3 añade una legitimación **colectiva** taxativa sujeta a una condición material: que la cuestión afecte **a la generalidad de sus miembros o asociados**. No se admite, pues, que una patronal consulte por el caso singular de una empresa concreta.

Cuándo. El requisito temporal del apartado 2 es determinante y reaparecerá en el art. 89: la consulta debe formularse **antes de que finalice el plazo** para ejercer el derecho, presentar la declaración o autoliquidación o cumplir la obligación. Consultar después no está prohibido, pero desactiva el efecto vinculante y, según el reglamento, conduce derechamente a la inadmisión.

Quién contesta. El apartado 5 emplea un criterio funcional que el reglamento traduce a un nombre propio.

Artículo 65 del RD 1065/2007 (RGGI) · Órgano competente para la contestación de las consultas tributarias escritas

En el ámbito de competencias del Estado, la competencia para contestar las consultas a las que se refiere esta subsección corresponderá a la **Dirección General de Tributos** del Ministerio de Economía y Hacienda, *sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88.8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.*

Cómo. El contenido mínimo del escrito lo fija el RGGI, y entre sus requisitos hay uno que anticipa el límite del art. 89.2.

Artículo 66 del RD 1065/2007 (RGGI) · Iniciación del procedimiento para la contestación de las consultas tributarias escritas (aps. 1, 6 y 7)

1. Las consultas se formularán por el obligado tributario mediante escrito dirigido al órgano competente para su contestación, que deberá contener **como mínimo:**

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, **número de identificación fiscal** del obligado tributario y, en su caso, del representante.
[...]

b) **Manifestación expresa** de si en el momento de presentar el escrito se **está tramitando o no un procedimiento, recurso o reclamación econó-**

mico-administrativa relacionado con el régimen, clasificación o calificación tributaria que le corresponda planteado en la consulta, *salvo que* esta sea formulada por las entidades a las que se refiere el artículo 88.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

c) **Objeto** de la consulta.

[...]

6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo, se requerirá al obligado tributario [...] para que en un **plazo de 10 días**, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, **subsane el defecto** con indicación de que de no atender el requerimiento en el plazo señalado **se le tendrá por desistido** de la consulta y se archivará sin más trámite.
7. Si la consulta se formulase **después de la finalización de los plazos** establecidos para el ejercicio del derecho, para la presentación de la declaración o autoliquidación o para el cumplimiento de la obligación tributaria, se procederá a su **inadmisión** y se comunicará esta circunstancia al obligado tributario.

Adviértase la **jerarquía normativa** en juego. El plazo de contestación de **seis meses** y el efecto del silencio están en la **Ley** (art. 88.6). El plazo de **10 días** de subsanación, el contenido mínimo del escrito y la **inadmisión** de la consulta extemporánea están en el **reglamento** (art. 66 RGGI). Atribuir a la LGT los 10 días —o al RGGI los seis meses— es un error clásico.

La tramitación permite requerir documentación al consultante y pedir informes a otros centros directivos (art. 67 RGGI).

Artículo 68 del RD 1065/2007 (RGGI) · Contestación de consultas tributarias escritas

1. *Cuando* la contestación a la consulta incorpore un **cambio de criterio administrativo**, la Administración deberá **motivar** dicho cambio.
2. *Cuando* la consulta haya sido formulada por alguna de las entidades a las que se refiere el artículo 88.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, su contestación **no tendrá efectos vinculantes** para aquellos **miembros o asociados** que en el momento de formular la consulta **estuviesen siendo objeto de un procedimiento, recurso o reclamación** económico-administrativa iniciado con anterioridad y relacionado con las cuestiones planteadas en la consulta conforme a lo dispuesto en su artículo 89.2.

4. Los efectos de las contestaciones (art. 89)

El art. 89 delimita a **quién vincula**, en **qué condiciones** y con **qué límites**.

Artículo 89 de la Ley 58/2003 (LGT) · Efectos de las contestaciones a consultas tributarias escritas

1. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá **efectos vinculantes**, en los términos previstos en este artículo, para los **órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos** en su relación con el **consultante**.

*En tanto no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso, se aplicarán al consultante los criterios expresados en la contestación, siempre y cuando la consulta se hubiese formulado en el **plazo** al que se refiere el apartado 2 del artículo anterior y no se hubieran alterado las **circunstancias, antecedentes y demás datos** recogidos en el escrito de consulta.*

Los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos **deberán aplicar los criterios** contenidos en las consultas tributarias escritas a **cualquier obligado**, *siempre que* exista **identidad entre los hechos y circunstancias** de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta.

2. **No tendrán efectos vinculantes** para la Administración tributaria las contestaciones a las consultas formuladas en el plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo anterior que planteen cuestiones **relacionadas con el objeto o tramitación de un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad**.
3. La presentación y contestación de las consultas **no interrumpirá los plazos** establecidos en las normas tributarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
4. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá **carácter informativo** y el obligado tributario **no podrá entablar recurso alguno** contra dicha contestación. Podrá hacerlo **contra el acto o actos administrativos** que se dicten posteriormente en aplicación de los criterios manifestados en la contestación.

De aquí salen las cinco reglas que hay que dominar.

Regla 1: vincula a la Administración, no al consultante. El obligado puede apartarse del criterio y autoliquidar de otro modo, asumiendo el riesgo de la regularización. Quien queda atado son «los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la **aplicación de los tributos**». La contestación no vincula a los **Tribunales Económico-Administrativos** —que no aplican tributos, sino que revisan— ni, por supuesto, a los tribunales de justicia.

Regla 2: el efecto se extiende erga omnes por identidad de hechos. El párrafo tercero del art. 89.1 obliga a aplicar el criterio «a **cualquier obligado**» siempre que exista **identidad entre los hechos y circunstancias**.

Regla 3: dos condiciones y dos causas de cese. Las condiciones son que la consulta se formulara **en plazo** (art. 88.2) y que **no se hayan alterado** las circunstancias descritas. Las causas de cese son la **modificación de la legislación** y el **cambio de la jurisprudencia**.

Regla 4: la exclusión del art. 89.2. Si la consulta plantea cuestiones relacionadas con el **objeto o la tramitación de un procedimiento, recurso o reclamación ya iniciado**, la contestación **no vincula**. De ahí que el art. 66.1.b) RGGI exija declarar expresamente si hay un procedimiento en curso: la consulta no puede usarse como atajo para condicionar una comprobación abierta.

Regla 5: no es un acto recurrible ni suspende plazos. El art. 89.4 la califica de **informativa** y cierra el recurso contra ella; se recurrirá, en su día, el acto que la aplique. Y el art. 89.3 impide usarla como excusa: presentar una consulta **no interrumpe** el plazo para autoliquidar o pagar.

EJEMPLO

① **Una consulta vinculante puesta a prueba en cuatro escenarios.** Una sociedad presenta el **10 de mayo de 2026** una consulta a la Dirección General de Tributos sobre la deducibilidad de un gasto en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2025, cuyo plazo de autoliquidación termina el **25 de julio de 2026** —fecha que, al caer en sábado, se traslada al primer día hábil siguiente, el **lunes 27**—. La DGT contesta el **20 de octubre de 2026** admitiendo la deducibilidad.

Escenario	Solución	Precepto
La consulta se formuló el 10 de mayo, antes del fin del plazo de autoliquidación	Requisito temporal cumplido : la contestación vincula	arts. 88.2 y 89.1
La DGT no contesta hasta pasados los 6 meses (10 de noviembre)	El plazo se incumple, pero el silencio no acepta el criterio del consultante	art. 88.6

Otra empresa, con hechos idénticos , invoca la contestación	La Administración debe aplicar el mismo criterio a cualquier obligado con identidad de hechos	art. 89.1, párr. 3
La sociedad tenía ya abierta una comprobación sobre ese mismo gasto cuando consultó	La contestación no vincula (y debió declararse en el escrito)	arts. 89.2 y 66.1.b) RGGI

Dos cautelas de cierre. La consulta **no interrumpió** el plazo de autoliquidación: la sociedad tuvo que autoliquidar en julio, sin respuesta, y si el criterio de octubre le resulta favorable, la vía es una **solicitud de rectificación de la autoliquidación**.

5. Información con carácter previo a la adquisición o transmisión de inmuebles (art. 90)

La segunda familia de «respuestas anticipadas» no versa sobre el criterio jurídico, sino sobre el **valor**.

Artículo 90 de la Ley 58/2003 (LGT) · Información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles

1. Cada Administración tributaria informará, a **solicitud del interesado** y en relación con los **tributos cuya gestión le corresponda**, sobre el **valor a efectos fiscales** de los bienes inmuebles que, **situados en el territorio de su competencia**, vayan a ser objeto de **adquisición o transmisión**.
2. Esta información tendrá **efectos vinculantes** durante un plazo de **tres meses**, contados desde la **notificación** al interesado, *siempre que* la solicitud se haya formulado **con carácter previo a la finalización del plazo** para presentar la correspondiente autoliquidación o declaración y se hayan proporcionado **datos verdaderos y suficientes** a la Administración tributaria.

Dicha información no impedirá la posterior comprobación administrativa de los elementos de hecho y circunstancias manifestados por el obligado tributario.

3. El interesado **no podrá entablar recurso alguno** contra la información comunicada. Podrá hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten posteriormente en relación con dicha información.

La falta de contestación no implicará la aceptación del valor que, en su caso, se hubiera incluido en la solicitud del interesado.

Tres datos. La **competencia** es de la Administración gestora del tributo y respecto de inmuebles **situados en su territorio** —lo que en la práctica remite a las comunidades autónomas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y en el de Sucesiones y Donaciones—. Los **efectos vinculantes duran tres meses** desde la notificación. Y el **silencio es negativo**: no contestar no significa aceptar el valor propuesto.

El reglamento añade el plazo de respuesta, que la ley había omitido.

Artículo 69 del RD 1065/2007 (RGGI) · Información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles (aps. 1 y 6)

1. En los tributos que graven la **adquisición o transmisión de bienes inmuebles** y cuya base imponible se determine por el **valor real** de dichos bienes, los obligados tributarios podrán solicitar a la Administración tributaria información sobre el valor de los que estén situados en el territorio de su competencia.

Esta información tendrá efectos vinculantes en los términos previstos en el artículo 90.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, *cuando* haya sido suministrada por la **Administración tributaria gestora** del tributo que grave la adquisición o la transmisión y en relación con los bienes inmuebles situados en el territorio de su competencia.

6. El **plazo para contestar** estas solicitudes de información será de **tres meses**.

MATIZ

Cuidado con los dos «tres meses» del art. 90 y del art. 69 RGGI, que no son el mismo. El de la **Ley** (art. 90.2) es la **duración del efecto vinculante** de la información ya notificada. El del **reglamento** (art. 69.6) es el **plazo de la Administración para contestar**. Y una tercera cautela: la información **no impide la posterior comprobación** de los hechos y circunstancias manifestados por el obligado, de modo que si los datos aportados eran incompletos o falsos, el valor comunicado no protege.

6. Los acuerdos previos de valoración (art. 91)

La tercera puerta es la más potente, pero también la más restringida: solo existe **cuando la ley o el reglamento propio de cada tributo la prevé**.

Artículo 91 de la Ley 58/2003 (LGT) · Acuerdos previos de valoración (aps. 1, 2 y 4 a 6)

1. Los obligados tributarios podrán solicitar a la Administración tributaria, *cuando las leyes o los reglamentos propios de cada tributo así lo prevean*, que determine con **carácter previo y vinculante la valoración a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos** determinantes de la deuda tributaria.
2. La solicitud deberá presentarse **por escrito, antes de la realización del hecho imponible** o, en su caso, en los plazos que establezca la normativa de cada tributo. A dicha solicitud se acompañará la **propuesta de valoración** formulada por el obligado tributario.

4. El acuerdo de la Administración tributaria se emitirá **por escrito**, con indicación de la **valoración**, del **supuesto de hecho** al que se refiere, del **impuesto** al que se aplica y de su **carácter vinculante**, de acuerdo con el procedimiento y en los plazos fijados en la normativa de cada tributo. *La falta de contestación de la Administración tributaria en plazo implicará la aceptación de los valores propuestos por el obligado tributario.*
5. *En tanto no se modifique la legislación o varíen significativamente las circunstancias económicas* que fundamentaron la valoración, la Administración tributaria que hubiera dictado el acuerdo **estará obligada a aplicar** los valores expresados en el mismo. Dicho acuerdo tendrá un **plazo máximo de vigencia de tres años** *excepto que* la normativa que lo establezca prevea otro distinto.
6. Los obligados tributarios **no podrán interponer recurso alguno** contra los acuerdos regulados en este precepto. Podrán hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten posteriormente en aplicación de las valoraciones incluidas en el acuerdo.

Su rasgo diferencial es que el **silencio es positivo**: la falta de contestación en plazo **implica la aceptación de los valores propuestos** por el obligado. Es la única de las tres figuras en que callar equivale a decir que sí.

EJEMPLO

② **Consulta, información previa y acuerdo de valoración: distinto sentido del silencio.** Un mismo contribuyente puede acudir por tres vías según qué necesite saber. El cuadro fija el objeto, el plazo relevante y el sentido del silencio de cada una.

Vía	Qué obtiene	Plazo relevante	Silencio
-----	-------------	-----------------	----------

Consulta escrita (arts. 88-89 LGT)	Criterio sobre régimen, clasificación o calificación	Contestación en 6 meses (art. 88.6)	Negativo: no se aceptan los criterios del escrito
Información previa de inmuebles (art. 90 LGT)	Valor fiscal de un inmueble a adquirir o transmitir	Efectos vinculantes 3 meses y contestación en 3 meses (art. 69.6 RGGI)	Negativo: no se acepta el valor incluido en la solicitud
Acuerdo previo de valoración (art. 91 LGT)	Valoración vinculante de rentas, productos, bienes o gastos	Vigencia máxima 3 años (art. 91.5)	Positivo: se aceptan los valores propuestos

Y un rasgo común a las tres: **ninguna es recurrible** (arts. 89.4, 90.3 y 91.6). Solo se recurre el acto administrativo posterior que aplique el criterio o la valoración.

7. El número de identificación fiscal

El NIF es la pieza que hace posible el censo y, con él, el control. Su régimen se apoya en la **disposición adicional sexta de la LGT** y se desarrolla, con todo el detalle, en el **Capítulo III del Título II del RGGI** (arts. 18 a 28). Casi todas las cifras de este apartado son **reglamentarias**.

Artículo 18 del RD 1065/2007 (RGGI) · Obligación de disponer de un número de identificación fiscal y forma de acreditación (aps. 1 y 2)

1. Las **personas físicas y jurídicas**, así como los obligados tributarios a que se refiere el **artículo 35.4** de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, tendrán un **número de identificación fiscal** para sus **relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria**.
2. El número de identificación fiscal podrá **acreditarse** por su titular mediante la exhibición del **documento expedido para su constancia por la Administración tributaria**, del **documento nacional de identidad** o del

documento oficial en que se asigne el **número personal de identificación de extranjero**.

Personas físicas. Para los **españoles**, el NIF es el número del **DNI** seguido de su carácter de verificación (art. 19.1 RGGI). Los españoles que no estén obligados a obtener DNI — por **residir en el extranjero** o por ser **menores de 14 años**— deben obtener un NIF propio, con una letra inicial que revela su situación.

Artículo 19.2 del RD 1065/2007 (RGGI) · El número de identificación fiscal de las personas físicas de nacionalidad española

2. Los españoles que realicen o participen en operaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria y **no estén obligados a obtener el documento nacional de identidad por residir en el extranjero** o por ser **menores de 14 años**, deberán obtener un número de identificación fiscal propio. [...] Este último estará integrado por **nueve caracteres** con la siguiente composición: una **letra inicial** destinada a indicar la naturaleza de este número, que será la **L** para los españoles residentes en el extranjero y la **K** para los españoles que, residiendo en España, sean menores de 14 años; siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético.

En el caso de que no lo soliciten, la Administración tributaria **podrá proceder de oficio** a darles de alta en el **Censo de Obligados Tributarios** y a asignarles el número de identificación fiscal que corresponda.

Para los **extranjeros**, el NIF es el **número de identidad de extranjero** (NIE) y, si no disponen de él, se les asigna uno que empieza por la letra **M** (art. 20 RGGI). Cuando el interesado obtiene después DNI o NIE, **prevalece este último**, y debe comunicar el cambio en **dos meses** a la Administración y a quienes deba constarles su número (art. 21 RGGI).

Personas jurídicas y entidades sin personalidad. Aquí el NIF lo asigna la **Administración**, es **invariable** salvo cambio de forma jurídica o de nacionalidad, e incorpora en su composición información sobre la forma jurídica, un número aleatorio y un carácter de control (art. 22.1 RGGI). El régimen de asignación introduce la distinción entre **provisional** y **definitivo**.

Artículo 24 del RD 1065/2007 (RGGI) · Asignación del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad (aps. 1 a 3)

1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria asignará el número de identificación fiscal en el **plazo de 10 días**. [...] *Cuando de la comprobación resultara que los datos no son veraces*, la Administración tributaria, previa **audiencia** a los interesados por un plazo de **10 días** [...] podrá **denegar** la asignación de dicho número.
2. El número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad tendrá **carácter provisional** *mientras* la entidad interesada **no haya aportado copia de la escritura pública** o documento fehaciente de su constitución y de los **estatutos sociales** o documento equivalente, así como **certificación de su inscripción**, cuando proceda, en un registro público.

El número de identificación fiscal, provisional o definitivo, **no se asignará** a las personas jurídicas o entidades que no aporten, al menos, un **documento debidamente firmado** en el que los otorgantes manifiesten su **acuerdo de voluntades** para la constitución de la persona jurídica o entidad u otro documento que acredite situaciones de cotitularidad. [...]

3. *Cuando se asigna un número de identificación fiscal provisional*, la entidad quedará obligada a la **aportación de la documentación pendiente** necesaria para la asignación del número de identificación fiscal definitivo en el plazo

de **un mes** desde la **inscripción en el registro público** correspondiente o desde el **otorgamiento de las escrituras públicas** [...].

Trascurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior, o **vencido el plazo de seis meses** desde la asignación de un número de identificación fiscal provisional, sin que se haya aportado la documentación pendiente, la Administración tributaria podrá **requerir su aportación** otorgando un plazo máximo de **10 días** [...].

El NIF a efectos del IVA. Los operadores intracomunitarios tienen un número específico, y el silencio, aquí, es **negativo**.

Artículo 25.1 del RD 1065/2007 (RGGI) · Especialidades del número de identificación fiscal de los empresarios o profesionales a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido

1. A efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, para las personas o entidades que realicen **operaciones intracomunitarias** a las que se refiere el apartado 2, el número de identificación será el definido de acuerdo con lo establecido en este reglamento, al que se **antepondrá el prefijo ES**, conforme al estándar internacional código **ISO-3166 alfa 2**.

Dicho número se asignará cuando se solicite por el interesado la inclusión en el **Registro de operadores intracomunitarios** [...]. *Si la Agencia Estatal de Administración Tributaria no hubiera resuelto en un plazo de tres meses, podrá considerarse **denegada** la asignación del número solicitado.*

Uso del NIF. El obligado debe incluir su NIF en todas las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos que presente, y también el de aquellos con quienes realice operaciones con trascendencia tributaria (art. 26 RGGI). La consecuencia de presentar un escrito sin NIF es característica.

Artículo 26.1 del RD 1065/2007 (RGGI) · Utilización del número de identificación fiscal ante la Administración tributaria

[...] Cuando el obligado tributario carezca de número de identificación fiscal, la **tramitación quedará condicionada** a la aportación del correspondiente número. **Transcurridos 10 días** desde la presentación *sin que se haya acreditado la solicitud* del número de identificación fiscal se podrá **tener por no presentada** la autoliquidación, declaración, comunicación o escrito, **previa resolución administrativa** que así lo declare.

Y en las operaciones con **entidades de crédito** (art. 28 RGGI) el NIF se convierte en llave de la operativa bancaria: puede abrirse una cuenta sin acreditarlo, pero la comunicación debe efectuarse **en el plazo de 15 días**, «*sin que pueda realizarse ningún movimiento hasta que se aporte*».

La revocación del NIF. El procedimiento para acordarla es **reglamentario** (art. 147 RGGI), pero sus efectos están en la **Ley**, y son severos.

Disposición adicional sexta de la Ley 58/2003 (LGT) · Número de identificación fiscal (ap. 4, párrs. 1 a 3)

4. La **publicación de la revocación** del número de identificación fiscal asignado en el «Boletín Oficial del Estado», determinará la **pérdida de validez a efectos identificativos** de dicho número en el ámbito fiscal.

Asimismo, la publicación anterior determinará que las **entidades de crédito no realicen cargos o abonos** en las cuentas o depósitos bancarios en que consten como titulares o autorizados los titulares de dichos números revocados, *salvo que se rehabilite* el número de identificación fiscal,

Cuando la revocación se refiera al número de identificación fiscal de una **entidad**, su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» implicará la **abstención del notario** para autorizar cualquier instrumento público [...], así

como la **prohibición de acceso a cualquier registro público**, incluidos los de carácter administrativo, *salvo que se rehabilite* el número de identificación fiscal. El registro público en el que esté inscrita la entidad [...] procederá a extender en la hoja abierta a dicha entidad una **nota marginal** en la que se hará constar que, en lo sucesivo, **no podrá realizarse inscripción alguna** que afecte a aquella [...].

8. La asistencia mutua

La última pieza del epígrafe es la más moderna. Desde el 1 de enero de 2012, la LGT integra en su cuerpo la cooperación tributaria internacional bajo el nombre de **asistencia mutua**, definida en el art. 1.2 y regulada, en cuanto a sus actuaciones, en el **Capítulo VI del Título III** (arts. 177 *bis* a 177 *quaterdecies*).

Artículo 1.2 de la Ley 58/2003 (LGT) · Objeto y ámbito de aplicación (párrs. 2 y 3)

A los efectos de esta ley, se entenderá por **asistencia mutua** el conjunto de acciones de **asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga** que el Estado español **preste, reciba o desarrolle** con la Unión Europea y otras entidades internacionales o supranacionales, y con otros Estados en virtud de la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios internacionales. La asistencia mutua podrá comprender la **realización de actuaciones ante obligados tributarios**.

La asistencia mutua a la que se refiere este apartado participa de la **naturaleza jurídica de las relaciones internacionales** a las que se refiere el artículo 149.1.3.^a de la Constitución.

La definición tiene dos notas relevantes. Es **tripartita** en cuanto al papel de España, que puede **prestar, recibir o desarrollar** la asistencia. Y su encuadre constitucional es el de

las **relaciones internacionales** (art. 149.1.3.^a CE), competencia exclusiva del Estado, lo que explica que el art. 5.3 LGT atribuya a la **AEAT** las competencias que de ella deriven.

Artículo 177 bis de la Ley 58/2003 (LGT) · Actuaciones de asistencia mutua

1. La Administración tributaria podrá **requerir y prestará** asistencia mutua tendente al **intercambio de información**, a la **recaudación de créditos** o a **otros fines** previstos en la normativa reguladora de dicha asistencia.
2. De conformidad con lo establecido en el **artículo 83.1, segundo párrafo**, de esta Ley, se considera **aplicación de los tributos** el ejercicio de las actividades y actuaciones a las que se refiere ese apartado realizadas en el ámbito de la normativa sobre asistencia mutua.
3. A las actuaciones que la Administración tributaria realice como consecuencia de **solicitudes de asistencia recibidas** les será de aplicación lo establecido en los **capítulos anteriores de este título**, con las **especialidades** contenidas en este capítulo.
4. La asistencia que la Administración tributaria preste a otros Estados o a entidades internacionales o supranacionales en virtud de la normativa sobre asistencia mutua estará sometida a las **limitaciones** establecidas en esta última.

El apartado 3 fija la técnica normativa del capítulo: **regla general** en los capítulos precedentes del Título III y **especialidades** en el de asistencia mutua.

En materia de **confidencialidad**, la información recibida de otro Estado conserva el carácter reservado del art. 95.1 y su cesión a terceros solo es posible «si la normativa del Estado o entidad que ha facilitado la información permite su utilización para fines similares» (art. 177 *ter*.2). El art. 95.6 remite, precisamente, a ese precepto.

En materia de **prueba**, la LGT resuelve expresamente el valor de lo recibido del exterior.

Artículo 106.2 de la Ley 58/2003 (LGT) · Normas sobre medios y valoración de la prueba

2. Las **pruebas o informaciones suministradas por otros Estados** o entidades internacionales o supranacionales **en el marco de la asistencia mutua** podrán **incorporarse**, con el valor probatorio que proceda conforme al apartado anterior, al procedimiento que corresponda.

En materia de **notificaciones**, el reglamento habilita a pedir a la autoridad competente de otro Estado que notifique actos españoles.

Artículo 114.4 del RD 1065/2007 (RGGI) · Notificación (párr. 1)

4. La Administración tributaria, en virtud de lo dispuesto en la **normativa sobre asistencia mutua**, podrá **solicitar de la autoridad competente de otro Estado** la práctica de **notificaciones** de cualquier acto dictado por dicha Administración tributaria.

RECUERDA

Información y asistencia (arts. 85-91 LGT): **publicaciones** del Ministerio de Hacienda en el **primer trimestre** (86, acceso por internet **gratuito**), **actuaciones de información** con texto íntegro anonimizado (87), **consultas escritas** (88: contestación en **6 meses**, competencia de la **DGT** ex art. 65 RGGI, subsanación **10 días** e **inadmisión** si son extemporáneas ex art. 66 RGGI) y sus **efectos** (89: vinculan a los órganos de **aplicación de los tributos**, se extienden a **cualquier obligado** con identidad de hechos, decaen si cambia la **legislación** o la **jurisprudencia**, **no** vinculan si hay procedimiento previo, **no** interrumpen plazos y **no** son recurribles). **Información previa de inmuebles** (90: vinculante **3 meses**, silencio **negativo**, contestación en **3 meses** ex art. 69.6 RGGI) y **acuerdos previos de valoración** (91: solicitud **antes del hecho imponible**, vigencia **3 años**, silencio **positivo**). **NIF** (DA 6.^a LGT y arts. 18-28 RGGI): **L** españoles en el extranjero, **K** menores de 14 años, **M** extranjeros sin NIE, asignación a entidades en **10 días**, **provisional** hasta aportar escritura y estatutos, documentación pendiente en **1 mes** y tope de **6 meses, 10 días** para acreditar la solicitud ante un escrito sin NIF, **15 días** en cuentas bancarias, **NIF-IVA** con prefijo **ES** y silencio **negativo a los 3 meses**. **Asistencia mutua** (arts. 1.2, 83.1 párr. 2, 177 bis y ss.): España **presta, recibe o desarrolla**, es **aplicación de los tributos**, participa de la naturaleza de las **relaciones internacionales** (art. 149.1.3.^a CE) y sus competencias corresponden a la **AEAT**.

TEMA 8

Epígrafe 3 — Normas comunes: prueba, notificaciones, obligación y plazo de resolución

1. El sistema de fuentes de los procedimientos tributarios (art. 97)

Artículo 97 de la Ley 58/2003 (LGT) · Regulación de las actuaciones y procedimientos tributarios

Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se regularán:

- a) Por las **normas especiales establecidas en este título** y la **normativa reglamentaria** dictada en su desarrollo, así como por las **normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias** y en su normativa reglamentaria de desarrollo.
- b) **Supletoriamente**, por las **disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos**.

Primero, por tanto, la LGT y el RGGI, más las normas procedimentales de las leyes propias de cada tributo. Solo **en su defecto**, las disposiciones generales del procedimiento administrativo —hoy la **Ley 39/2015, de 1 de octubre**, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la que la LGT **no** cita por su nombre—.

2. Las fases del procedimiento: iniciación (art. 98)

Artículo 98 de la Ley 58/2003 (LGT) · Iniciación de los procedimientos tributarios (aps. 1, 2 y 4)

1. Las actuaciones y procedimientos tributarios podrán iniciarse **de oficio o a instancia del obligado tributario**, mediante **autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud** o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.
2. Los documentos de iniciación de las actuaciones y procedimientos tributarios deberán incluir, *en todo caso*, el nombre y apellidos o razón social y el **número de identificación fiscal** del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente.
4. En el ámbito de competencias del Estado, el **Ministro de Hacienda** podrá determinar los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar por **medios telemáticos** sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.

En la **iniciación de oficio**, la comunicación de inicio tiene contenido tasado —procedimiento que se inicia, objeto con indicación de obligaciones y periodos, requerimiento y plazo, **efecto interruptivo del plazo legal de prescripción** y, en su caso, propuesta de resolución o liquidación (art. 87.3 RGGI)— y un plazo mínimo de respuesta.

Artículo 87.4 del RD 1065/2007 (RGGI) · Iniciación de oficio

4. *Salvo en los supuestos de iniciación mediante personación*, se concederá al obligado tributario un **plazo no inferior a 10 días**, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la comunicación de inicio, para que **comparezca, aporte la documentación requerida** y la que considere conveniente, o efectúe cuantas **alegaciones** tenga por oportunas.

Iniciado el procedimiento, las declaraciones o autoliquidaciones que el obligado presente sobre lo mismo pierden buena parte de su virtualidad: **no** inician un procedimiento de devolución ni producen los efectos de los arts. 27 y 179.3 LGT —esto es, no operan como regularización voluntaria con recargo y sin sanción—, y los ingresos posteriores tienen carácter de **ingresos a cuenta** de la liquidación que se practique (art. 87.5 RGGI).

En la **iniciación a instancia del obligado**, la solicitud debe contener unos extremos mínimos —identificación y NIF, hechos, razones y petición, lugar, fecha y firma, y órgano al que se dirige (art. 88.2 RGGI)—, y su defecto no provoca el archivo inmediato.

Artículo 89.1 del RD 1065/2007 (RGGI) · Subsanación

1. Si el documento de iniciación **no reúne los requisitos** que se señalan en los apartados 2 y 3 del artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la normativa específica aplicable, se **requerirá al interesado** para que en un **plazo de 10 días**, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, **subsane la falta** o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que *si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido* y se procederá al **archivo sin más trámite**.

3. Desarrollo de las actuaciones (art. 99)

Artículo 99 de la Ley 58/2003 (LGT) · Desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios (aps. 2, 6, 7 y 8)

2. Los obligados tributarios pueden **rehusar la presentación** de los documentos que **no resulten exigibles** por la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido **previamente presentados por ellos mismos** y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. Se podrá, *en todo caso*, requerir al interesado la **ratificación de datos** específicos propios o de terceros, previamente aportados.

6. Para la **práctica de la prueba** en los procedimientos tributarios **no será necesaria la apertura de un período específico** ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.
7. Las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos de aplicación de los tributos se documentarán en **comunicaciones, diligencias, informes** y otros documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento.

Las **comunicaciones** son los documentos a través de los cuales la Administración **notifica** al obligado tributario el **inicio del procedimiento** u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los **requerimientos** que sean necesarios a cualquier persona o entidad. [...]

Las **diligencias** son los **documentos públicos** que se extienden para **hacer constar hechos**, así como las **manifestaciones** del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. Las diligencias **no podrán contener propuestas de liquidaciones** tributarias.

Los órganos de la Administración tributaria emitirán, de oficio o a petición de terceros, los **informes** que sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico [...].

8. En los procedimientos tributarios se podrá **prescindir del trámite de audiencia** previo a la propuesta de resolución *cuando* se suscriban **actas con acuerdo** o *cuando* en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un **trámite de alegaciones posterior** a dicha propuesta. En este último caso, el expediente se pondrá de manifiesto en el trámite de alegaciones.

El trámite de alegaciones **no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15.**

Dos especialidades definen el procedimiento tributario frente al administrativo común. La primera, del art. 99.6: **no hay periodo de prueba** ni comunicación previa de su apertura. La segunda, del art. 99.7: las **diligencias no pueden contener propuestas de liquidación**, reservadas a las actas y a las propuestas de resolución.

El art. 99.8 aporta, además, uno de los pocos plazos de este bloque que están **en la Ley** y no en el reglamento: el trámite de alegaciones dura entre **10 y 15 días**, con un mínimo y un máximo.

El RGGI completa el desarrollo con reglas de detalle. El **lugar y horario** de las actuaciones (art. 90 RGGI) se ajusta al horario oficial o a la jornada del obligado, y solo con su consentimiento puede excederse. La **ampliación de plazos** (art. 91 RGGI) no puede exceder de **la mitad** del plazo, solo se concede **una vez**, debe solicitarse «*con anterioridad a los tres días previos*» al vencimiento, se entiende **automáticamente concedida** por la mitad con la sola presentación en plazo de la solicitud salvo denegación expresa, y ni su concesión ni su denegación son recurribles. El **acceso a archivos y registros** de expedientes concluidos se resuelve en **un mes** con silencio **desestimatorio** (art. 94.2 RGGI).

4. Terminación (art. 100)

Artículo 100 de la Ley 58/2003 (LGT) · Terminación de los procedimientos tributarios

1. Pondrá fin a los procedimientos tributarios la **resolución**, el **desistimiento**, la **renuncia al derecho** en que se fundamente la solicitud, la **imposibilidad material de continuarlos** por causas sobrevenidas, la **caducidad**, el **cumplimiento de la obligación** que hubiera sido objeto de requerimiento o **cualquier otra causa** prevista en el ordenamiento tributario.
2. Tendrá la consideración de resolución la **contestación efectuada de forma automatizada** por la Administración tributaria en aquellos procedimientos en que esté prevista esta forma de terminación.

La lista es **abierta** por su inciso final, y contiene un modo de terminación privativo del Derecho tributario: el **cumplimiento de la obligación objeto del requerimiento**. El apartado 2, por su parte, da carta de naturaleza a la **actuación administrativa automatizada**.

5. La obligación de resolver (art. 103)

Artículo 103 de la Ley 58/2003 (LGT) · Obligación de resolver

1. La Administración tributaria está **obligada a resolver expresamente** todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos, así como a **notificar dicha resolución expresa**.
2. **No existirá obligación de resolver expresamente** en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que *sólo deban ser objeto de comunicación* por el obligado tributario y en los que se produzca la **caducidad**, la **pérdida sobrevenida del objeto** del procedimiento, la **renuncia** o el **desistimiento** de los interesados.

No obstante, cuando el interesado **solicite expresamente** que la Administración tributaria declare que se ha producido alguna de las referidas circunstancias, ésta quedará **obligada a contestar** a su petición.

3. Los actos de **liquidación**, los de **comprobación de valor**, los que **impongan una obligación**, los que **denieguen un beneficio fiscal** o la **suspensión de la ejecución** de actos de aplicación de los tributos, así como cuantos otros se dispongan en la normativa vigente, **serán motivados** con referencia sucinta a los **hechos y fundamentos de derecho**.

La obligación de resolver es **doble**: resolver y **notificar**. Las excepciones del apartado 2 son cuatro más una, pero todas ceden si el interesado pide expresamente una declaración al respecto. Y el apartado 3 enumera los actos que **deben motivarse**, entre los que destaca la **liquidación**, en coherencia con el art. 102.2.c).

6. Los plazos de resolución y los efectos de la falta de resolución (art. 104)

Artículo 104 de la Ley 58/2003 (LGT) · Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa

1. El **plazo máximo** en que debe notificarse la resolución será el fijado por la **normativa reguladora** del correspondiente procedimiento, *sin que pueda exceder de seis meses, salvo que* esté establecido por una **norma con rango de ley** o venga previsto en la **normativa comunitaria europea**. *Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses.*

El plazo se contará:

- a) En los procedimientos **iniciados de oficio**, desde la **fecha de notificación del acuerdo de inicio**.
- b) En los procedimientos **iniciados a instancia del interesado**, desde la fecha en que el documento haya tenido **entrada en el registro del órgano competente** para su tramitación.

Queda excluido de lo dispuesto en este apartado el **procedimiento de apremio**, cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el **plazo de prescripción del derecho de cobro**.

2. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un **intento de notificación** que contenga el **texto íntegro de la resolución**.

En el caso de sujetos obligados o acogidos voluntariamente a recibir notificaciones practicadas a través de **medios electrónicos**, la obligación de

notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos se entenderá cumplida con la **puesta a disposición** de la notificación en la **sede electrónica** de la Administración Tributaria o en la **dirección electrónica habilitada**.

Los **períodos de interrupción justificada** que se especifiquen reglamentariamente, las **dilaciones** en el procedimiento por **causa no imputable a la Administración Tributaria**, y los **períodos de suspensión** del plazo que se produzcan conforme a lo previsto en esta Ley **no se incluirán en el cómputo** del plazo de resolución.

3. En los procedimientos **iniciados a instancia de parte**, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa producirá los efectos que establezca su **normativa reguladora**. [...]

En defecto de dicha regulación, los interesados podrán entender **estimadas** sus solicitudes por silencio administrativo, *salvo* las formuladas en los procedimientos de ejercicio del **derecho de petición** a que se refiere el artículo 29 de la Constitución y en los de **impugnación de actos y disposiciones**, en los que el silencio tendrá **efecto desestimatorio**.

Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado tributario, la Administración le **advertirá** que, transcurridos **tres meses**, podrá **declarar la caducidad** del mismo.

4. En los procedimientos **iniciados de oficio**, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución expresa producirá los efectos previstos en la normativa reguladora de cada procedimiento [...].

En ausencia de regulación expresa, se producirán los siguientes efectos:

a) Si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el **reconocimiento** o, en su caso, la **constitución de derechos** u otras situaciones jurídicas individualizadas, los obligados tributarios podrán entender **desestimados** por silencio administrativo los posibles efectos favorables derivados del procedimiento.

b) En los procedimientos susceptibles de producir **efectos desfavorables o de gravamen** se producirá la **caducidad** del procedimiento.

5. Producida la caducidad, ésta será **declarada**, de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el **archivo de las actuaciones**.

Dicha caducidad **no producirá, por sí sola, la prescripción** de los derechos de la Administración tributaria, *pero* las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados **no interrumpirán el plazo de prescripción** ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta ley.

Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los **documentos y otros elementos de prueba** obtenidos en dicho procedimiento, **conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios** en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario.

El plazo. El techo es de **seis meses**, que solo puede superarse si lo establece una **norma con rango de ley** o la **normativa comunitaria europea** —el ejemplo canónico es el procedimiento inspector del art. 150, con sus 18 o 27 meses—. Y si la norma reguladora calla, el plazo **también** es de seis meses. El **apremio** queda fuera: sus actuaciones se extienden hasta la prescripción del derecho de cobro.

El dies a quo. De oficio, la **notificación del acuerdo de inicio**. A instancia de parte, la **entrada en el registro del órgano competente**, que el art. 102.1 RGGI identifica con el del órgano competente para *iniciar la tramitación*.

El *dies ad quem*. La obligación es de **notificar**, no de dictar. Pero el art. 104.2 la suaviza: basta acreditar **un intento de notificación con el texto íntegro** de la resolución, y en las notificaciones electrónicas basta la **puesta a disposición**.

Lo que no cuenta. Las **interrupciones justificadas**, las **dilaciones por causa no imputable** a la Administración y los **periodos de suspensión**. Su desarrollo, y una regla de cómputo capital, están en el reglamento.

Artículo 102 del RD 1065/2007 (RGGI) · Cómputo de los plazos máximos de resolución (aps. 4, 5 y 6)

4. Los períodos de interrupción justificada, las dilaciones por causa no imputable a la Administración y los periodos de suspensión y de extensión del plazo del procedimiento inspector deberán **documentarse adecuadamente** para su constancia en el expediente.
5. A efectos del cómputo del plazo de duración del procedimiento, los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración se contarán por **días naturales**, y respecto del **procedimiento inspector** se estará a lo dispuesto en los artículos 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 184 de este reglamento.
6. El obligado tributario tendrá **derecho** [...] a **conocer el estado del cómputo** del plazo de duración y la existencia de las circunstancias previstas en los artículos 103 y 104 de este Reglamento [...] con indicación de las **fechas de inicio y fin de cada periodo**, *siempre que lo solicite expresamente*.

Artículo 103 del RD 1065/2007 (RGGI) · Períodos de interrupción justificada (letras a a c)

- a) *Cuando*, por cualquier medio, se pidan **datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos a otros órganos o unidades administrativas**

de la misma o de otras Administraciones, por el tiempo que transcurra desde la remisión de la petición hasta la recepción de aquellos por el órgano competente para continuar el procedimiento, *sin que la interrupción por este concepto pueda exceder*, para todas las peticiones [...], de **seis meses**. Cuando se trate de **solicitudes formuladas a otros Estados**, este plazo será de **12 meses**.

b) Cuando, por cualquier medio, se pidan datos, informes, dictámenes o valoraciones a **otro Estado o entidad internacional o supranacional** como consecuencia de la información previamente recibida de los mismos en el marco de la **asistencia mutua** [...] *sin que la interrupción por este concepto pueda exceder*, para todas las peticiones, de **12 meses**. Este plazo de interrupción es **independiente** del regulado en el párrafo a) anterior.

c) Cuando se aprecien **indicios de delito contra la Hacienda Pública** y se remita el expediente al **Ministerio Fiscal** o a la jurisdicción competente, por el tiempo que transcurra desde dicha remisión hasta que, en su caso, se produzca la recepción del expediente devuelto o de la resolución judicial [...].

Artículo 104 del RD 1065/2007 (RGGI) · Dilaciones por causa no imputable a la Administración (letras a a c)

a) Los **retrasos** por parte del obligado tributario al que se refiera el procedimiento en el cumplimiento de **comparecencias o requerimientos** de aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria [...]. La dilación se computará desde el día siguiente al de la fecha fijada para la comparecencia o desde el día siguiente al del fin del plazo concedido para la atención del requerimiento **hasta el íntegro cumplimiento** de lo solicitado. [...]

b) La **aportación por el obligado tributario de nuevos documentos y pruebas** una vez realizado el trámite de audiencia o, en su caso, de alegaciones. [...]

c) La concesión por la Administración de la **ampliación de cualquier plazo**, así como la concesión del **aplazamiento de las actuaciones** solicitado por el obligado, por el tiempo que medie desde el día siguiente al de la finalización del plazo previsto o la fecha inicialmente fijada hasta la fecha fijada en segundo lugar.

EJEMPLO

③ **Cómputo del plazo con interrupciones y dilaciones.** La Administración inicia de oficio una **comprobación limitada** —procedimiento susceptible de efectos desfavorables, cuya norma reguladora no fija plazo distinto del general — con acuerdo de inicio **notificado el 10 de marzo de 2026**. Durante su tramitación ocurren tres incidencias.

Hito	Cómputo	Norma
Notificación del acuerdo de inicio	<i>Dies a quo:</i> 10 de marzo	art. 104.1.a) LGT
Plazo máximo, al no haber plazo especial distinto	6 meses → 10 de septiembre	arts. 104.1 y 139.1.b) LGT
Petición de un informe de valoración a otro órgano administrativo: 45 días	Interrupción justificada: no computa (tope global de 6 meses)	art. 103.a) RGGI
Retraso del obligado en atender un requerimiento: 12 días desde el fin del plazo hasta el cumplimiento íntegro	Dilación no imputable: no computa	art. 104.a) RGGI
Ampliación de plazo concedida al obligado: 5 días	Dilación no imputable: no computa	art. 104.c) RGGI

Nuevo vencimiento	10 de septiembre + 45 + 12 + 5 = 11 de noviembre	art. 104.2 LGT y 102.5 RGGI
-------------------	--	-----------------------------

Dos precisiones de cierre. Los 62 días se cuentan por **días naturales** (art. 102.5 RGGI) y deben quedar **documentados en el expediente** (art. 102.4 RGGI), y el obligado tiene derecho a **conocer el estado del cómputo** si lo solicita (art. 102.6 RGGI). Y si no se ha notificado el **11 de noviembre** a más tardar, el procedimiento **caduca** (art. 104.4.b): la caducidad no prescribe por sí sola el derecho a liquidar, pero las actuaciones del procedimiento caducado **no interrumpen la prescripción** (art. 104.5), de modo que el plazo de cuatro años del art. 66.a) habrá seguido corriendo desde el principio como si nada hubiera pasado.

MATIZ

Los efectos del silencio siguen **dos regímenes distintos** que no deben mezclarse. En los procedimientos **iniciados a instancia de parte** (art. 104.3), a falta de regulación expresa el silencio es **estimatorio**, con dos excepciones desestimatorias: el **derecho de petición** del art. 29 CE y la **impugnación de actos y disposiciones**. En los **iniciados de oficio** (art. 104.4), a falta de regulación expresa el vencimiento produce **desestimación** por silencio si del procedimiento pudieran derivarse derechos, y **caducidad** si es susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen. Y hay un tercer plazo que no es ninguno de los dos: la **paralización por causa imputable al obligado** permite a la Administración, **previa advertencia**, declarar la caducidad **transcurridos tres meses** (art. 104.3, último párrafo).

7. La prueba (arts. 105 a 108)

Artículo 105 de la Ley 58/2003 (LGT) · Carga de la prueba

1. En los procedimientos de aplicación de los tributos **quien haga valer su derecho** deberá **probar los hechos constitutivos** del mismo.
2. Los obligados tributarios **cumplirán su deber de probar** si **designan de modo concreto los elementos de prueba** en poder de la Administración tributaria.

La regla del apartado 1 es bidireccional: la Administración debe probar los hechos que fundan la existencia y cuantía de la obligación, y el obligado debe probar los hechos que fundan lo que él invoca a su favor: una **exención**, una **deducción**, un **gasto deducible**, un **beneficio fiscal**. El apartado 2 introduce una regla de **facilidad probatoria**: si la prueba ya está en poder de la Administración, basta con **designarla de modo concreto**.

Artículo 106 de la Ley 58/2003 (LGT) · Normas sobre medios y valoración de la prueba (aps. 1, 3 y 4)

1. En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre **medios y valoración de prueba** se contienen en el **Código Civil** y en la **Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil**, *salvo que la ley establezca otra cosa*.
3. La **ley propia de cada tributo** podrá exigir **requisitos formales de deducibilidad** para determinadas operaciones que tengan relevancia para la cuantificación de la obligación tributaria.
4. Los **gastos deducibles y las deducciones** que se practiquen, cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, **de forma prioritaria, mediante la factura** entregada por el empresario o profesional que haya realizado la corres-

pondiente operación que cumpla los requisitos señalados en la normativa tributaria.

Sin perjuicio de lo anterior, la factura **no constituye un medio de prueba privilegiado** respecto de la existencia de las operaciones, por lo que **una vez que la Administración cuestiona fundadamente su efectividad**, corresponde al **obligado tributario** aportar pruebas sobre la **realidad de las operaciones**.

El art. 106.4 condensa una doctrina jurisprudencial consolidada: la factura es el **medio prioritario** de justificación, pero no es prueba privilegiada de que la operación exista. Cuestionada de forma **fundada** su efectividad, la carga vuelve al obligado.

Artículo 107 de la Ley 58/2003 (LGT) · Valor probatorio de las diligencias

1. Las **diligencias** extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios tienen naturaleza de **documentos públicos** y **hacen prueba de los hechos** que motiven su formalización, *salvo que se acredite lo contrario*.
2. Los **hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario** objeto del procedimiento, así como sus **manifestaciones**, se **presumen ciertos** y *sólo podrán rectificarse* por éstos mediante prueba de que incurrieron en **error de hecho**.

Artículo 108 de la Ley 58/2003 (LGT) · Presunciones en materia tributaria (aps. 1 a 4)

1. Las **presunciones establecidas por las normas tributarias** pueden destruirse mediante **prueba en contrario**, *excepto en los casos* en que una **norma con rango de ley** expresamente lo prohíba.

2. Para que las **presunciones no establecidas por las normas** sean admisibles como medio de prueba, es **indispensable** que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un **enlace preciso y directo** según las reglas del criterio humano.
3. La Administración tributaria podrá considerar como **titular** de cualquier bien, derecho, empresa, servicio, actividad, explotación o función a **quien figure como tal en un registro fiscal o en otros de carácter público, salvo prueba en contrario.**
4. Los **datos y elementos de hecho consignados** en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios **se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse** por los mismos mediante **prueba en contrario.**

Los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos en cumplimiento de la **obligación de suministro de información** recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley que vayan a ser utilizados en la **regularización de la situación tributaria de otros obligados** se presumen ciertos, *pero deberán ser contrastados* de acuerdo con lo dispuesto en esta sección **cuando el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad** de los mismos. Para ello podrá exigirse al declarante que **ratifique y aporte prueba** de los datos relativos a terceros incluidos en las declaraciones presentadas.

8. Las notificaciones (arts. 109 a 112)

Artículo 109 de la Ley 58/2003 (LGT) · Notificaciones en materia tributaria

El **régimen de notificaciones** será el previsto en las **normas administrativas generales** con las **especialidades** establecidas en esta sección.

La técnica es de **remisión con especialidades**. Las normas administrativas generales son hoy la **Ley 39/2015** —a la que, de nuevo, la LGT no nombra—, y las especialidades tributarias son tres: el **lugar** (art. 110), las **personas legitimadas** (art. 111) y la **notificación por comparecencia** (art. 112).

Artículo 110 de la Ley 58/2003 (LGT) · Lugar de práctica de las notificaciones

1. En los procedimientos **iniciados a solicitud del interesado**, la notificación se practicará en el **lugar señalado a tal efecto** por el obligado tributario o su representante o, **en su defecto**, en el **domicilio fiscal** de uno u otro.
2. En los procedimientos **iniciados de oficio**, la notificación **podrá** practicarse en el **domicilio fiscal** del obligado tributario o su representante, en el **centro de trabajo**, en el lugar donde se **desarrolle la actividad económica** o en **cualquier otro adecuado** a tal fin.

En los procedimientos **a instancia de parte** hay **orden de prelación** cerrado: lugar señalado y, en su defecto, domicilio fiscal. En los de **oficio** la lista es **abierta** y alternativa, cerrada por una cláusula general —«cualquier otro adecuado a tal fin»—.

Artículo 111 de la Ley 58/2003 (LGT) · Personas legitimadas para recibir las notificaciones

1. *Cuando* la notificación se practique en el **lugar señalado al efecto** por el obligado tributario o por su representante, o en el **domicilio fiscal** de uno u otro, **de no hallarse presentes** en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma **cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio** y haga constar su identidad, así como los **empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios** donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante.

2. El **rechazo** de la notificación realizado por el **interesado o su representante** implicará que **se tenga por efectuada** la misma.

Nótese la asimetría del apartado 2: el rechazo solo produce el efecto de tener por notificado cuando lo realiza el **interesado o su representante**, no cualquier tercero que se encontrara en el domicilio.

Artículo 112 de la Ley 58/2003 (LGT) · Notificación por comparecencia

1. *Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.*

En este supuesto se **citará al interesado** o a su representante para ser notificados **por comparecencia** por medio de **anuncios** que se publicarán, **por una sola vez para cada interesado**, en el «Boletín Oficial del Estado».

La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» se efectuará los **lunes, miércoles y viernes** de cada semana. Estos anuncios **podrán** exponerse asimismo en la **oficina** de la Administración tributaria correspondiente al **último domicilio fiscal conocido**. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en el **extranjero**, el anuncio se podrá exponer en el **consulado o sección consular** de la embajada correspondiente.

2. En la publicación constará la **relación de notificaciones pendientes** con indicación del **obligado tributario** o su representante, el **procedimiento** que las motiva, el **órgano competente** de su tramitación y el **lugar y**

plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado.

En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el **plazo de 15 días naturales**, contados desde el **siguiente al de la publicación** del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». *Transcurrido dicho plazo sin comparecer*, la notificación **se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento** del plazo señalado.

3. *Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido* el obligado tributario o su representante, **se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias** de dicho procedimiento, y se mantendrá el **derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento** del mismo. *No obstante*, las **liquidaciones** que se dicten en el procedimiento y los **acuerdos de enajenación de los bienes embargados** deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta Sección.

Artículo 114.1 del RD 1065/2007 (RGGI) · Notificación

1. *Cuando no sea posible efectuar la notificación* al obligado tributario o a su representante por causas no imputables a la Administración se harán constar en el expediente las **circunstancias del intento** de notificación.

Se dejará **constancia expresa del rechazo** de la notificación, de que el destinatario está **ausente** o de que consta como **desconocido** en su domicilio fiscal o en el lugar designado al efecto para realizar la notificación.

Una vez realizados los **dos intentos** de notificación sin éxito en los términos establecidos en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procederá cuando ello sea posible a dejar al destina-

rio **aviso de llegada** en el correspondiente casillero domiciliario [...]. Dicho aviso de llegada se dejará a efectos **exclusivamente informativos**.

El art. 115 RGGI cierra el círculo: si el obligado **comparece** dentro de los 15 días naturales, se practica la notificación y se documenta en diligencia firmada por el compareciente; si comparece pero **rehúsa** recibir la documentación, se documenta el rechazo y la notificación se entiende practicada conforme al art. 111.2 LGT.

EJEMPLO

④ **Cuando nadie recoge la notificación de una liquidación.** La AEAT intenta notificar una liquidación en el domicilio fiscal del obligado —procedimiento iniciado de oficio— y no logra entregarla.

Paso	Regla	Norma
Intentos en el domicilio fiscal	Al menos dos , con constancia en el expediente de sus circunstancias	art. 112.1 LGT y 114.1 RGGI
Si el destinatario consta como desconocido	Basta un solo intento	art. 112.1 LGT
Tras los dos intentos fallidos	Aviso de llegada en el casillero, a efectos exclusivamente informativos	art. 114.1 RGGI
Citación para comparecer	Anuncio en el BOE , una sola vez por interesado, publicado lunes, miércoles o viernes	art. 112.1 LGT
Plazo para comparecer	15 días naturales desde el día siguiente a la publicación	art. 112.2 LGT
Si no comparece	Notificación producida el día siguiente al vencimiento del plazo	art. 112.2 LGT

Con fechas: publicado el anuncio el **miércoles 3 de junio de 2026**, el plazo corre del **4 al 18 de junio** (naturales). Si el obligado no comparece, la liquida-

ción se entiende notificada el **19 de junio**. Como esa fecha queda comprendida entre el día 16 y el último del mes, el pago en periodo voluntario vence el **día 5 del segundo mes posterior**, esto es, el **5 de agosto de 2026** —día hábil— (art. 62.2.b), y desde el 19 de junio corren también los plazos de impugnación. Y aunque el obligado ya se tenga por notificado de las **sucesivas actuaciones** del procedimiento (art. 112.3), las **liquidaciones** y los **acuerdos de enajenación de los bienes embargados** deben notificarse siempre con arreglo a esta sección.

9. Otras normas comunes: domicilio, denuncia, comprobación y plan de control

Entrada en el domicilio (art. 113). Cuando sea necesario entrar en el **domicilio constitucionalmente protegido** de un obligado o efectuar registros en él, la Administración debe obtener su **consentimiento** o la **autorización judicial**. La solicitud de autorización «deberá estar debidamente justificada y **motivar la finalidad, necesidad y proporcionalidad**» de la entrada, y tanto la solicitud como la concesión pueden practicarse **aun con carácter previo al inicio formal** del procedimiento, siempre que el acuerdo de entrada identifique al obligado y los **conceptos y períodos** que van a ser objeto de comprobación y se aporte al órgano judicial.

Denuncia pública (art. 114). Permite poner en conocimiento de la Administración hechos que puedan ser constitutivos de infracción o tener trascendencia para la aplicación de los tributos. Es **independiente** del deber de colaborar de los arts. 93 y 94. El órgano competente puede **archivarla** si la considera infundada o si no se concretan suficientemente los hechos o las personas, y cuando se inician actuaciones «la denuncia **no formará parte** del expediente administrativo». El denunciante **no es interesado**, no se le informa del resultado y **no está legitimado** para recurrir.

Potestades de comprobación e investigación (art. 115). La Administración puede comprobar e investigar hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios y valores, y puede hacerlo **aun respecto de ejercicios prescritos** conforme al art. 66.a) siempre que resulte precisa en relación con derechos no prescritos —con el límite del art.

66 bis.2—. Puede, además, **calificar** los hechos con independencia de la calificación previa del obligado y del periodo en que la realizó.

Plan de control tributario (art. 116). Se elabora **anualmente**, tiene **carácter reservado**, «aunque ello no impedirá que se hagan públicos los **criterios generales** que lo informen».

RECUERDA

Fuentes (97): LGT y su reglamento primero, disposiciones generales del procedimiento administrativo **supletoriamente**. **Fases**: iniciación de oficio o a instancia (98, con el plazo **no inferior a 10 días** del art. 87 RGGI y la subsanación en **10 días** del art. 89 RGGI, con apercibimiento de desistimiento), desarrollo (99: **sin periodo de prueba específico**, diligencias **sin propuestas de liquidación**, alegaciones **10-15 días**) y terminación (100: resolución, desistimiento, renuncia, imposibilidad material, **caducidad**, cumplimiento del requerimiento). **Resolver** (103): deber de resolver **y notificar**, con excepciones que ceden si el interesado lo pide. **Plazos** (104): máximo **6 meses** salvo norma con rango de ley o europea, **apremio excluido**, cómputo desde la notificación del acuerdo de inicio o la entrada en registro, basta un **intento con texto íntegro**, **no computan** interrupciones justificadas, dilaciones y suspensiones (RGGI 102-104: **días naturales**, tope de **6 meses** para peticiones a otros órganos y **12 meses** a otros Estados), silencio **estimatorio** a instancia de parte con dos excepciones y **caducidad** de oficio en procedimientos de gravamen, con archivo y sin efecto interruptivo de la prescripción. **Prueba** (105-108): prueba quien **hace valer su derecho**, medios del **Código Civil y la LEC**, factura **no privilegiada**, diligencias como **documentos públicos**, presunciones destruyibles salvo prohibición **por ley**. **Notificaciones** (109-112): régimen general con especialidades, prelación solo a instancia de parte, rechazo por el interesado equivale a notificación, comparecencia con **2 intentos** (uno si es desconocido), anuncio en el **BOE** una sola vez los **lunes, miércoles y viernes**, comparecencia en **15 días naturales** y notificación producida **al día siguiente** del vencimiento.

TEMA 8

Epígrafe 4 — Las liquidaciones tributarias

1. Concepto: el acto que cuantifica la deuda

Artículo 101 de la Ley 58/2003 (LGT) · Las liquidaciones tributarias: concepto y clases (aps. 1 y 2)

1. La **liquidación tributaria** es el **acto resolutorio** mediante el cual el **órgano competente** de la Administración realiza las **operaciones de cuantificación** necesarias y **determina el importe de la deuda tributaria** o de la **cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar** de acuerdo con la normativa tributaria.

La Administración tributaria **no estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados** por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento.

2. Las liquidaciones tributarias serán **provisionales o definitivas**.

De la definición legal se extraen tres caracteres. Es un **acto resolutorio** —no de trámite—, y por tanto **impugnable** de manera autónoma. Es **declarativo**, porque la obligación tributaria no nace con la liquidación, sino con la realización del **hecho imponible** (art. 20.1). Y lo dicta el **órgano competente** de la Administración, lo que la distingue radicalmente de la **autoliquidación**, que es una actuación del obligado (art. 120) y no un acto administrativo.

El párrafo segundo del art. 101.1 es la habilitación de la que vive todo el control tributario: la Administración **no queda vinculada** por lo declarado. Cuando se separa de los datos consignados nace un deber correlativo de **motivar** (arts. 102.2.c) y 103.3).

2. Clases: provisionales y definitivas

Artículo 101 de la Ley 58/2003 (LGT) · Las liquidaciones tributarias: concepto y clases (aps. 3 y 4)

3. Tendrán la consideración de **definitivas**:

- a) Las practicadas en el **procedimiento inspector** previa **comprobación e investigación de la totalidad de los elementos** de la obligación tributaria, *salvo lo dispuesto en el apartado 4* de este artículo.
- b) Las demás a las que **la normativa tributaria otorgue tal carácter**.

4. **En los demás casos**, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de **provisionales**.

Podrán dictarse **liquidaciones provisionales** en el **procedimiento de inspección** en los siguientes supuestos:

- a) *Cuando* alguno de los **elementos de la obligación tributaria se determine en función de los correspondientes a otras obligaciones que no hubieran sido comprobadas**, que hubieran sido regularizadas mediante **liquidación provisional** o mediante **liquidación definitiva que no fuera firme**, o *cuando existan elementos de la obligación tributaria cuya comprobación con carácter definitivo no hubiera sido posible* durante el procedimiento, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
- b) *Cuando* proceda formular **distintas propuestas de liquidación** en relación con una misma obligación tributaria. Se entenderá que concurre esta circunstancia cuando el **acuerdo** al que se refiere el artículo 155 de esta ley **no incluya todos los elementos** de la obligación tributaria, cuando la **conformidad del obligado no se refiera a toda la propuesta** de regularización, cuando se realice una **comprobación de valor** y no sea el objeto

único de la regularización y en el resto de supuestos que estén previstos reglamentariamente.

c) **En todo caso** tendrán el carácter de **provisionales** las liquidaciones dictadas al amparo de lo dispuesto en el **artículo 250.2** de esta Ley.

La estructura del precepto es de **regla y excepción invertidas**. La ley define primero lo **definitivo** —de forma tasada— y remite todo lo demás a lo **provisional**. En consecuencia, **todas las liquidaciones de gestión son provisionales**: las del procedimiento de verificación de datos, las del procedimiento iniciado mediante declaración, las de comprobación limitada.

3. Por qué importa la distinción: el efecto preclusivo

Que una liquidación sea provisional o definitiva no es una etiqueta formal: decide **qué puede volver a hacer la Administración** sobre ese mismo concepto y periodo.

La liquidación **definitiva** produce un **efecto preclusivo**: comprobada la totalidad de los elementos de la obligación, la Administración no puede volver a regularizar ese concepto y periodo, salvo que aparezcan hechos nuevos en otro procedimiento o proceda alguno de los procedimientos especiales de revisión del Título V. Es una liquidación **cerrada**.

La liquidación **provisional**, en cambio, **no agota** la comprobación. Deja abierta la posibilidad de una regularización posterior sobre los elementos no comprobados, mientras no prescriba el derecho a liquidar (art. 66.a).

MATIZ

No confundir **provisional/definitiva** con **firme/no firme**. La primera pareja responde a si cabe un **nuevo pronunciamiento administrativo** sobre la misma obligación en otro procedimiento de aplicación de los tributos. La segunda, a si el acto sigue siendo **recurrible** o ya ha agotado los plazos de impugnación. Las dos clasificaciones se cruzan: una liquidación **provisional** gana **firmeza** si no se recurre en plazo, y una liquidación **definitiva** puede **no ser firme** mientras esté recurrida. De hecho, el propio art. 101.4.a) habla de una «liquidación definitiva **que no fuera firme**», lo que confirma que los dos ejes son independientes.

EJEMPLO

⑤ **Provisional o definitiva: qué queda abierto y qué queda cerrado.** Un contribuyente autoliquida su IRPF del ejercicio 2024 declarando rendimientos del trabajo, una ganancia patrimonial por la venta de un inmueble y una deducción por inversión en empresas de nueva creación. La Administración actúa en dos momentos.

Actuación	Alcance	Clase de liquidación	Qué queda abierto
Comprobación limitada de Gestión sobre la deducción por inversión	Solo un elemento de la obligación	Provisional (art. 101.4)	Todo lo demás: rendimientos, ganancia patrimonial
Inspección posterior de la totalidad de los elementos del IRPF 2024	Comprobación e investigación completa	Definitiva (art. 101.3.a)	Nada: efecto preclusivo sobre ese concepto y periodo

Ahora un giro: si en el curso de esa inspección resulta que la **ganancia patrimonial** depende del valor de adquisición fijado en el Impuesto sobre Sucesiones, aún **no comprobado**, la inspección deberá dictar liquidación **provisional** al amparo del art. 101.4.a), aunque el alcance del procedimiento fuera general. Y si se apreciaran indicios de **delito contra la Hacienda pública** y se dictase la

liquidación vinculada a delito, sería **provisional en todo caso** (art. 101.4.c, por remisión al art. 250.2).

Cuantitativamente: si la comprobación limitada regularizó la deducción por 3.000 €, esa liquidación provisional **no impide** que la inspección posterior vuelva sobre los otros elementos y practique una liquidación definitiva por, digamos, 11.500 €, deduciendo de la cuota resultante lo ya ingresado. Lo que **no podría** hacer la Administración es, tras la liquidación definitiva, abrir un tercer procedimiento sobre el mismo IRPF 2024 sin hechos nuevos.

4. La notificación de las liquidaciones (art. 102)

Artículo 102 de la Ley 58/2003 (LGT) · Notificación de las liquidaciones tributarias

1. Las liquidaciones deberán ser **notificadas** a los obligados tributarios en los términos previstos en la **sección 3.ª del capítulo II del título III** de esta ley.
2. Las liquidaciones se notificarán con expresión de:
 - a) La **identificación del obligado tributario**.
 - b) Los **elementos determinantes de la cuantía** de la deuda tributaria.
 - c) La **motivación** de las mismas *cuando no se ajusten a los datos consignados* por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los **hechos y elementos esenciales** que las originen, así como de los **fundamentos de derecho**.
 - d) Los **medios de impugnación** que puedan ser ejercidos, **órgano** ante el que hayan de presentarse y **plazo** para su interposición.
 - e) El **lugar, plazo y forma** en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
 - f) Su **carácter de provisional o definitiva**.

3. En los **tributos de cobro periódico por recibo**, una vez notificada la liquidación correspondiente al **alta** en el respectivo **registro, padrón o matrícula**, podrán **notificarse colectivamente** las sucesivas liquidaciones **mediante edictos** que así lo adviertan.

El **aumento de base imponible** sobre la resultante de las declaraciones **deberá notificarse al contribuyente** con expresión concreta de los **hechos y elementos adicionales** que lo motiven, *excepto cuando* la modificación provenga de **revalorizaciones de carácter general** autorizadas por las leyes.

4. **Reglamentariamente** podrán establecerse los supuestos en los que **no será preceptiva la notificación expresa**, *siempre que* la Administración **así lo advierta por escrito** al obligado tributario o a su representante.

El apartado 2 fija un **contenido tasado de seis letras**, entre las que sobresalen dos por su relevancia práctica. La letra c) convierte en obligatoria la **motivación** siempre que la liquidación se aparte de lo declarado —lo que enlaza con la habilitación del art. 101.1 y con el art. 103.3—. Y la letra f) obliga a expresar el **carácter provisional o definitivo**, precisamente porque de esa calificación depende lo que la Administración podrá hacer después.

El apartado 3 introduce la llamada **notificación colectiva**, propia de los **tributos de cobro periódico por recibo** como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. La garantía se conserva para lo que perjudica: todo **aumento de base imponible** sobre la declarada debe notificarse individualmente y motivado, salvo que proceda de una **revalorización general** autorizada por ley.

5. Notificación colectiva y notificación tácita

Junto a la notificación **expresa** —regla general del art. 102.2— y la **colectiva** del art. 102.3, la LGT contempla en otros preceptos supuestos en que la liquidación se entiende **producida y notificada por el mero transcurso de un plazo**, sin acto expreso, si la Administración no notifica otra cosa. Es la llamada **notificación tácita**.

Artículo 155.5 de la Ley 58/2003 (LGT) · Actas con acuerdo

5. Se entenderá **producida y notificada la liquidación** y, en su caso, **impuesta y notificada la sanción**, en los términos de las propuestas formuladas, si transcurridos **diez días**, contados desde el **siguiente a la fecha del acta**, no se hubiera notificado al interesado acuerdo del órgano competente para liquidar **rectificando los errores materiales** que pudiera contener el acta con acuerdo.

Artículo 156.3 de la Ley 58/2003 (LGT) · Actas de conformidad

3. Se entenderá **producida y notificada la liquidación tributaria** de acuerdo con la propuesta formulada en el acta si, en el **plazo de un mes** contado desde el **día siguiente a la fecha del acta**, no se hubiera notificado al interesado acuerdo del órgano competente para liquidar, con alguno de los siguientes contenidos:
 - a) **Rectificando errores materiales.**
 - b) **Ordenando completar el expediente** mediante la realización de las actuaciones que procedan.
 - c) **Confirmando la liquidación propuesta** en el acta.
 - d) Estimando que en la propuesta de liquidación ha existido **error en la apreciación de los hechos** o indebida aplicación de las normas jurídicas y **concediendo al interesado plazo de audiencia** previo a la liquidación que se practique.

El contraste entre ambos preceptos es el siguiente. En el **acta con acuerdo**, el plazo de silencio es de **diez días** y la única salvedad es la rectificación de **errores materiales**. En el **acta de conformidad**, el plazo es de **un mes** y las salvedades son **cuatro contenidos** posibles, porque el órgano competente para liquidar conserva un margen de revisión sobre la propuesta del actuario.

RECUERDA

Liquidación (art. 101): **acto resolutorio** del órgano competente que realiza las **operaciones de cuantificación** y determina la **deuda** o la cantidad a **devolver o compensar**. La Administración **no está obligada** a ajustarse a lo declarado. **Definitivas** solo las del **procedimiento inspector** previa comprobación de la **totalidad** de los elementos y aquellas a las que la normativa otorgue tal carácter (101.3); **provisionales todas las demás** (101.4), incluidas las de inspección en los tres supuestos tasados —elementos dependientes de otras obligaciones no comprobadas, **distintas propuestas** sobre una misma obligación y, **en todo caso**, las del art. 250.2—. La **definitiva** precluye; la **provisional** deja abierta la regularización posterior hasta la prescripción. **Notificación** (art. 102): remisión a los arts. 109-112 y **contenido tasado** de seis letras (identificación, elementos de la cuantía, **motivación** si se aparta de lo declarado, **medios de impugnación**, lugar, plazo y forma de pago, y **carácter provisional o definitivo**); **notificación colectiva por edictos** en los tributos de **cobro periódico por recibo** tras notificar el **alta**, salvo **aumento de base imponible**, que se notifica individualmente y motivado excepto en **revalorizaciones generales**. Y **notificación tácita** por transcurso de **diez días** en el **acta con acuerdo** (art. 155.5) y de **un mes** en el **acta de conformidad**, con **cuatro contenidos** posibles de salvedad (art. 156.3).

<!-- VERIF T8: 12 correcciones — art. 5 LGT: restituido el ap. 5 omitido del blockquote; art. 104.4.a) LGT: restituido «o, en su caso,»; art. 112.2 LGT: restituido «de las mismas»; art. 112.3 LGT: restituido «el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo» y «los bienes embargados» (2 cortes); Ejemplo ⑤: aritmética corregida, 10-sep + 62 días naturales = 11-nov (no 12-nov), y ajustada la frase de caducidad; Ejemplo ⑦: añadido el cómputo del art. 62.2.b) LGT (notificación 19-jun → pago voluntario hasta el 5-ago-2026); Ejemplo ⑧: precisado que el 25-jul-2026 cae en sábado y se traslada al lunes 27; RECUERDA E3: eliminado el «;» pegado tras negrita; restituidos los títulos oficiales completos de los arts. 19, 25 y 26 RGGI; anidamiento bold-dentro-de-cursiva deshecho en arts. 91.4 LGT, 25.1 RGGI y 108.4 LGT. Verificados contra consolidados: arts. 83-116

LGT y RGGI del extracto, más arts. 1.2, 5, 62, 96, 155, 156, 177 bis LGT y arts. 65-69, 77 RGGI descargados del BOE. Sin cambios: plazos y porcentajes ya vigentes y correctamente atribuidos (ley vs. reglamento); sin inglés ni meta. ->

TU OPOSICIÓN, EN UNA APP



El temario que tienes en las manos cobra vida en la app Persevera, con todo para estudiarlo:

tests · psicotécnicos · flashcards con repaso espaciado · supuestos
cursos · simulacros · mapas mentales · tutor IA · planificador

7 días de prueba · Suscripción sin permanencia: cancelas cuando quieras.



APP STORE

para iPhone y iPad



GOOGLE PLAY

para Android



EN LA WEB

app.perseveraoposiciones.com

DEL MISMO EQUIPO



Eroodite — Estudia cualquier cosa con IA

Persevera es para tu oposición. **Eroodite, para todo lo demás:** tu carrera universitaria, otras oposiciones o cualquier material que caiga en tus manos. Sube tus apuntes, PDFs, vídeos de YouTube o fotos y su inteligencia artificial te crea al momento exámenes, fichas de repaso, resúmenes y mapas mentales. Con un tutor con IA que resuelve dudas —hasta las que le haces una foto—, repaso espaciado y modo concentración.

Tus apuntes, listos para estudiar en segundos. Empieza gratis.



APP STORE

para iPhone y iPad



GOOGLE PLAY

para Android